

ANÁLISIS GEOPOLÍTICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO

Andrea Rodríguez Gómez

* Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto “Construcción de Paz y Desarrollo Sostenible: una mirada desde los Derechos Humanos y el DICA”, que hace parte de la línea de investigación “Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” de la República de Colombia.

Introducción

¡El departamento del Tolima fue testigo de la barbarie de los ataques que las guerrillas colombianas perpetraron en contra de la población civil, por ello es fundamental documentar aquellos actos con base en un análisis previo de la situación del país antes de los mismos y una observación geopolítica, económica y social de las consecuencias de las acciones que dejaron como víctimas una gran cantidad de miembros de las Fuerzas Militares de Colombia!

La dinámica del conflicto armado en Tolima se concentró desde sus inicios en el sur del departamento, esta fue zona de repliegue y refugio para alias Alfonso Cano como jefe del secretariado de las Farc, personaje que fue dado de baja en Suárez (Cauca) en noviembre de 2011 por miembros de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima.

El departamento del Tolima posee una serie de características geográficas que resultan ser muy llamativas para los grupos armados al margen de la ley. Por un lado, la zona Norte de Tolima asegura las comunicaciones entre el centro y el occidente del país, conectando al departamento de Cundinamarca con el Eje cafetero, la zona del Magdalena Medio y el puerto de Buenaventura en la costa pacífica; hacia la zona Suroriental, comunica las áreas montañosas y corredores entre las cordilleras Central y Oriental y el Norte del Huila, B y Caquetá; y hacia la zona Suroccidental los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, tienen como eje el cañón de Las Hermosas, una zona vital para la subversión porque posee corredores para la movilización entre el Pacífico, los departamentos de Cauca y Nariño y el centro del país.

El capítulo a continuación pretende exponer cómo se agudizó la violencia en el departamento por parte de las guerrillas, principalmente las Farc, enfocando la investigación en los principales ataques que perpetraron en contra de las Fuerzas Militares y resaltando como los miembros de las Fuerzas Militares operaron para neutralizar esta amenaza.

Análisis geopolítico del conflicto armado y los intereses de los grupos armados el departamento del Tolima

Figura 1. División regional de Tolima



Fuente: División Regional del Tolima, 2019

El departamento de Tolima tiene una extensión de 23.562 Km², dividida en 47 municipios, de estos el más extenso es Chaparral con 2.229 km² y

Planadas la población más distante por vía terrestre (241 Km.), estos municipios están localizados en la zona suroccidental. Su población es de 1.316.053 habitantes, 844.632 vive en las cabeceras municipales y 471.421 vive en la zona rural; el 50,8% de la población rural y el 19,6% de la población urbana tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI) y se estima un índice de desempleo de 17,1 %. Su capital, Ibagué, concentra el 37% de la población total y el PIB departamental constituye el 2,34% del PIB nacional. (Gobernación del Tolima, 2017)

El dominio territorial del Departamento es un objetivo de primer orden para los grupos armados irregulares, ya que permite su movilización y el tráfico de drogas y armas, al servir de corredor natural al ser conector con diferentes departamentos del país.

Este departamento ha sido influenciado por el ELN y por las Farc con el frente Tulio Varón, en cuanto a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se dio un proceso de adquisición y concentración de tierras liderado por narcotraficantes, cuyos intereses eran protegidos por estos grupos. Debido a la presencia de estos grupos los recursos naturales se han visto afectados, pues el desarrollo de cultivos de amapola en las partes altas de la cordillera Central son los factores determinantes de valorización estratégica del territorio y objeto de la competencia armada entre grupos armados ilegales.

La zona adquiere un nuevo potencial en términos económicos, políticos y sociales, ya que es un corredor estratégico hacia el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura, lo que impulsa la realización de proyectos de desarrollo turístico, agroindustrial y comercial. Esta región se convirtió en objetivo de dominio para las Farc desde los años noventa, pasando a ser territorio de disputa por la incursión del bloque Tolima de las autodefensas.

El sur del departamento del Tolima es una zona de difícil acceso, convirtiéndolo en un territorio muy apetecido por grupos insurgentes, que establecieron zonas de reabastecimiento y economías ligadas a la siembra de cultivos de amapola. Esta zona represento dos tipos de intereses para la guerrilla de las Farc; por un lado, buscar el dominio sobre esta parte del valle del río Magdalena, que se comunica con las áreas

montañosas que se encuentran entre las cordilleras Central y Oriental y confluyen, a través de la cuchilla del Altamizal, con el Sumapaz, el norte del Huila y el piedemonte hacia Meta y Caquetá. Por otra parte, ahí está ubicado el cañón de Las Hermosas -zona vital por la actividad amapolera- que permite la movilidad entre el Pacífico, Cauca, Nariño y el centro del país. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2007)

En todas estas zonas, la dinámica de la confrontación se ha caracterizado por las recurrentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, debido a que los grupos irregulares imitaban las prácticas de terror aplicadas comúnmente por las autodefensas como método de confrontación, pues en la disputa por el dominio de posiciones estratégicas, la guerrilla terminó recurriendo en igual medida a las masacres y asesinatos de civiles.

Históricamente, con el establecimiento del Frente Nacional, el Tolima sufrió una polarización ideológica, ya que toda manifestación armada fue calificada como bandolera, sin entrar en posibles afines políticos o de orientaciones partidistas. De algunas organizaciones surgió una intención de canalizar las acciones bandoleras tanto de derecha como de izquierda hacia la lucha política, tal como ocurrió en el sur del departamento.

En cuanto a la guerrilla, hasta el acuerdo de paz el departamento del Tolima hacía parte de la zona de influencia del Comando Conjunto Central (CCC) Adán Izquierdo de las Farc, al mando de alias Iván Ríos, quien se desempeñó como negociador en la ZD. Esta estructura estuvo conformada por los frentes 21, 25, 50, las compañías Tulio Varón, Joselo Lozada, y las columnas móviles Héroes de Marquetalia, Jacobo Prías Alape y Daniel Aldana. El frente 21, liderado por Luis Eduardo Rayo, fue uno de los más activos y tuvo como área de influencia el sur de la región, concretamente el cañón de Las Hermosas y el río Davis. El frente 25 Armando Ríos, al mando de Enelio Gaona Ospina, alias Bertil, actuaba en las estribaciones de la cordillera Oriental en límites con Cundinamarca a través del Páramo de Sumapaz hasta límites con Huila, por lo que en ocasiones recibió apoyo del frente 17 Angelino Godoy. Los anteriores frentes ocuparon una zona de gran importancia

estratégica e histórica para las Farc, puesto que dominaban corredores que este grupo utilizó para establecerse en los departamentos del Valle y Cauca, además de Huila y Caquetá. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2007)

El frente 50 Cacique Calarcá hizo presencia desde el Eje Cafetero hacia la zona Centro y se encontraba al mando de alias Enrique, quien fue dado de baja en combate en el año 2005 en La Línea. También estuvo presente en sectores vecinos a Ibagué y estuvieron replegados hacia la zona montañosa fronteriza con el departamento del Quindío. La compañía Tulio Varón hizo presencia en la zona Norte y fue una de las más golpeadas por la acción de la Fuerza Pública, posterior a su debilitamiento fue reforzada con parte del frente 47 que ingresaron desde el oriente de Caldas y del frente Joselo Lozada. (Gómez, 2014)

Así también, la compañía Joselo Lozada al mando de alias Libardo o El Pollo, actuó principalmente en Ataco, Ortega, Rovira, Planadas y Rioblanco, fue utilizada como columna de apoyo para otros frentes. De otro lado, la columna móvil Héroes de Marquetalia se movía entre Planadas, Ataco y Rioblanco y apoyaba las acciones ofensivas del frente 21. La columna Jacobo Prías Alape hizo presencia en Alvarado, Venadillo, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Herveo, Villahermosa, Palocabildo e incluso por la zona rural de Ibagué hacia el cañón del río Cocora. Por último, la columna Daniel Aldana actuó en el suroccidente, sin embargo al parecer por una orden habría pasado a apoyar las acciones guerrilleras en Cauca y Nariño. Las Farc también contaban con las milicias bolivarianas en Ibagué, la Escuela de Formación Político-Militar “Hernán Murillo Toro” en el sur del Tolima y la Comisión “Manuelita Sáenz”, de apoyo logístico y de inteligencia urbana (Observatorio Nacional de Paz, 2012).

Por otro lado, la influencia del ELN se manifestó a través del frente Bolcheviques en Líbano, Herveo, Casabianca, Villahermosa, Palocabildo, Falan y se encuentra compuesta por tres comisiones: Guillermo Ariza (militar), Armando Triviales (Líbano) y Héroes 20 de Octubre (Cafetera); adicionalmente en Ibagué opera la regional Gilberto Guarín. Actualmente, su actividad se reduce al fortalecimiento de sus finanzas

por la vía de las extorsiones, el boleteo, y el secuestro. En el año 2006, con la captura de alias Silvio, ideólogo de este frente, su protagonismo armada se redujo significativamente, a pesar de haber recibido apoyo del frente Carlos Alirio Buitrago desde Antioquia (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2007).

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ELP), fue otro actor irregular presente en el departamento desde el año 1999, pero en 2007 cuando Edgar Penagos alias Gonzalo fue dado de baja en combate por miembros de la Sexta Brigada del Ejército Nacional el grupo estableció una alianza estratégica con la guerrilla del ELN, con el fin de incrementar las extorsiones y la fuerza en el territorio, mientras que se dedicaban a acciones de formación política e ideológica.

Teniendo en cuenta que el narcotráfico es una fuente fundamental del financiamiento de estas estructuras, la variedad de pisos térmicos ha permitido a los grupos armados la siembra de cultivos de coca y de amapola, San José de las Herosas en Chaparral ha sido uno de los principales centros amapoleros del país y en sus veredas se daba la rotación semanal de venta del látex para la producción de heroína. De otro lado, las actividades relacionadas con la extorsión y el secuestro, se registraron con mayor frecuencia en los núcleos urbanos del departamento, afectando la actividad industrial y comercial (Uribe, 1991).

Ante los avances de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, los grupos guerrilleros tuvieron que transformar su estructura de ingresos, disminuyendo la comisión de estos delitos. En cuanto a las autodefensas, en la época del Frente Nacional, comunidades agrarias e indígenas participaron en desarrollo de operaciones contra los núcleos guerrilleros comunistas del sur del Tolima, en el río Chiquito. Estas primeras autodefensas campesinas no explican del todo el fenómeno de los grupos que aparecen a partir de los años ochenta, pues terminado el periodo de la pacificación de Guillermo León Valencia, la dinámica de las autodefensas campesinas perdió importancia hasta casi desaparecer. El origen de los grupos de autodefensas estuvo asociado a un fenómeno de compra de tierras por parte de narcotraficantes y a la protección de cultivos ilícitos (Sánchez, 1998).

Los hermanos Ochoa y narcotraficantes del Valle iniciaron compras en varios municipios del departamento, se calcula que estas se localizan en dos tercios de los municipios, ubicados en la cordillera Central y en el Valle del Magdalena, principalmente. El Norte se presentó un rápido incremento de los precios de la tierra, como resultado de grandes compras efectuadas por mafias de Antioquia. La estrategia era adquirir tierras desvalorizadas por la inseguridad creada por la guerrilla y mediante estructuras armadas que se encargaban de neutralizar la acción de la insurgencia y hacer que los predios se valorizaran (Sánchez, 1998).

En el sur del departamento, los grupos de autodefensa aplicaron como estrategia la protección de las actividades desarrolladas de la producción de amapola, que a pesar de la bonanza que provocó, se vio debilitada por el incremento de homicidios al interior de la misma estructura, por quienes buscaban el monopolio sobre los cultivos ilícitos. Además, estas estructuras se enfrentaron con las Farc en Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas. Finalmente, la protección de cultivos ilícitos se dio también por las autodefensas en los municipios de la cordillera del Norte del Tolima ante el repliegue del ELN y las Farc.

El interés geoestratégico de las autodefensas en el Tolima, aparte de la lucha contrainsurgente, fue el dominio sobre el río Magdalena y de los ejes viales que conectan el centro con el norte y el sur del país, con puntos claves de vigilancia del transporte hacia el sur y el norte del departamento. El cobro de gramaje sobre la coca que provenía del Putumayo, Caquetá y Huila, fue una de sus principales fuentes de financiación, así como el cobro de vacunas a los arroceros y el robo de gasolina. (Rueda, 1981)

Las tres estructuras de las autodefensas que hacían presencia en la región se desmovilizaron en el marco del proceso de negociación acordado entre el Gobierno y del grupo armado. El bloque Tolima de las AUC dejó las armas en octubre de 2005, el frente Omar Isaza en febrero de 2006, y el bloque Centauros en el mes de septiembre del mismo año. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, la emergencia de organizaciones armadas irregulares al margen de la ley se ha

traducido en presiones y amenazas de muerte sobre los desmovilizados de los bloques Centauros y Tolima para que retomen las armas. Las nuevas estructuras armadas emergentes de estos grupos se enfrentaron a bloques de las Farc que habían recuperado los territorios que estaban bajo la influencia de las autodefensas. Según la Defensoría del Pueblo, desde el segundo semestre del año anterior, se ha logrado identificar 4 nuevas estructuras con un escenario de injerencia no muy claro, y con intereses asociados al negocio de sustancias ilícitas y la venta de servicios de seguridad (Sánchez, 2009).

En el sector urbano de Ibagué se conoció la presencia del denominado bloque Pijao, conformado por mandos medios del bloque Tolima que no se desmovilizaron, y cuyo accionar se basaba en extorsiones y vacunas a los sectores comerciales y de transportes. Por medio de acciones de inteligencia, la Fuerza Pública logró la captura de varios de sus integrantes, hasta que se logró la desarticulación de esta organización (Observatorio Nacional de Paz, 2012).

A pesar de la presencia de guerrillas y autodefensas el departamento del Tolima fue afectado por grupos armados organizados como los denominados Conquistadores del Tolima el cual actuaba en Chaparral, Ataco, Guamo y Espinal; a este se le atribuyeron crímenes como secuestros y homicidios comerciantes. Este grupo ha tenido refuerzos provenientes de Urabá y de la Costa norte, aunque disminuyó su accionar a raíz de algunas capturas, aún es señalado por las autoridades como una banda del crimen organizado, que tiene presencia en Ortega, Saldaña y Coyaima, con secuestros y extorsiones. También se percibió la presencia de las Águilas Negras, grupo que tuvo la intención de ocupar el territorio, donde actuó el frente Omar Isaza. De acuerdo con inteligencia militar, esta organización estaría dirigida por alias Político en el norte y alias Arturo en el sur del Tolima, segundos al mando del extinto bloque Tolima (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2007).

El anterior panorama hace que el Tolima sea una de las zonas más afectadas por la confrontación armada debido a la constante pugna por el poder territorial entre los actores armados irregulares más representativos, las Farc, el ELN, las autodefensas y nuevas bandas emergentes.

No debe olvidarse que la región sur fue el mito fundacional de las Farc en la vereda Marquetalia del municipio de Planadas, cuna de esta organización en 1964.

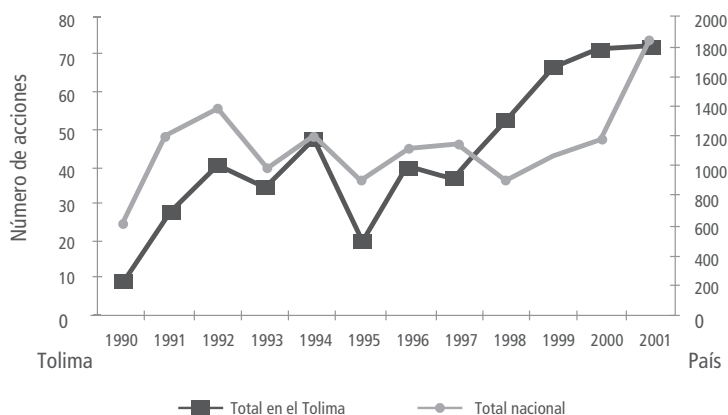
El mayor protagonismo bélico de este grupo frente a los otros grupos guerrilleros, se expresa en el hecho de que el 70% del total de las acciones armadas registradas entre 1998 y 2003 se relacionaban con esta guerrilla. Ante la expansión de la capacidad de inteligencia y el fortalecimiento de la movilidad de las tropas de las Fuerzas Militares, que han permitido reducir la iniciativa insurgente mediante la detención, identificación y ataque de objetivos guerrilleros, la estrategia de la insurgencia sufrió cambios importantes a raíz de las operaciones militares en la zona, esto ha sido denominado en la literatura internacional sobre conflictos irregulares “aproximación indirecta”, esto consiste en seccionar sus objetivos, mientras que el enfrentamiento directo con el Ejército es dejado de lado, limitándose a evaluar su capacidad de reacción (Liddell, 1654).

El accionar de los grupos armados en el departamento del Tolima

El incremento de la presencia territorial de la insurgencia y de su poder de fuego adquirido durante los años noventa fue creciente y constante, particularmente por las Farc. Durante los años de conflicto las acciones propias de la confrontación, como los contactos armados, hostigamientos y los sabotajes, aumentaron visiblemente en el conjunto de acciones armadas, mientras que las formas típicas de financiamiento como asaltos a poblaciones, entidades y vehículos de transporte disminuyeron. Estos cambios evidenciaban la mayor capacidad militar con la que contaba la guerrilla de las Farc hasta el acuerdo de paz, resultado en buena medida de haber desarrollado economías de guerra a partir de recursos que, como en el caso de los cultivos ilícitos, ligan lo local y lo internacional.

Figura 2. Gráfico de percepción, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

¿Cuál fue la época con más violencia en Colombia? Justifique su respuesta



Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Sala de Estrategia Nacional. Presidencia de la República. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

La figura anterior compara la evolución de la actividad armada del conflicto en el país y en el Tolima durante los años 90', esto permite descubrir la existencia de una elevada integración del ritmo de la confrontación que se produjo a nivel regional y a nivel nacional. Se advierte, por tanto, la coincidencia en buena medida de alzas y bajas en la intensidad del conflicto en 1992, 1994 y los picos que se producen con posterioridad a 1998. La tendencia hacia el escalamiento del conflicto que comienza a ser clara a partir de 1999 en el país, en Tolima se descubre un año antes.

El mayor poderío militar de las Farc frente a los otros grupos guerrilleros que operaron en el departamento, se expresó en el hecho de que el 76% de las acciones armadas registradas en el Tolima entre 1990 y el mes de septiembre de 2001, se relacionaron con esta guerrilla. En segundo lugar se estuvo el ELN con el 19%, mientras que el 5% restante fueron accionadas por parte de otros grupos armados.

Al considerar las acciones armadas más recurrentes en el marco de la confrontación que libró el departamento, se pone de presente que el 40% corresponde a 195 contactos armados que partieron de la iniciativa de las Fuerzas Militares contra las guerrillas y en particular contra las Farc, mientras que el 60%, fueron de autoría de las guerrillas. Es preciso destacar que el porcentaje de acciones de las Fuerzas Militares en contra de la insurgencia a partir de 1999 comenzó a ser superior al promedio histórico, comportamiento que favoreció los resultados favorables al Estado en su enfrentamiento contra la insurgencia, que define un cambio radical con respecto a la situación que se vivía antes de esto, cuando las Farc, entre 1996 y 1998, se habían propuesto demostrar su poderío en las zonas con presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar (López, 2007).

Entre 1999 y el 2001 los contactos entre Fuerza Pública y guerrillas se concentró principalmente en el norte, oriente y sur del Tolima. En el primer caso, los municipios de Líbano, Ibagué, Falan, Venadillo y Santa Isabel fueron el principal escenario de la lucha del Estado contra el bloque Tulio Varón de las Farc e integrantes del Erp. El mayor esfuerzo del Ejército Nacional en combatir a las Farc se expresó en numerosos combates librados con el frente 25, en los municipios de Prado, Dolores y Natagaima hacia la parte más oriental del departamento. Hacia el sur, los frentes 21 y Joselo Lozada fueron enfrentados por las FF.MM. principalmente en Chaparral, Rioblanco y Roncesvalles. (González, 2014)

Entre los hechos de mayor relevancia en la lucha contra las guerrillas, cabe mencionar los siguientes: en febrero de 2000 en Santa Isabel se presentaron enfrentamientos entre unidades del Ejército y guerrilleros del frente Tulio Varón de las Farc, de los cuales fueron dados de baja ocho; en abril, en el corregimiento Puerto Saldaña en jurisdicción de Rioblanco, se produjo un enfrentamiento entre unidades del Ejército y guerrilleros del frente 21 de las Farc, de los cuales cuatro fueron abatidos; en julio, en Roncesvalles, integrantes del batallón contraguerrilla No.15 dieron de baja a veinte guerrilleros de los frentes 21 y Joselo Lozada de las Farc que acababan de atacar la estación de Policía del municipio con armas de fuego y cilindros de gas cargados con explosivos; en

agosto, en este mismo municipio, en las veredas El Diamante y Cucuenita, en enfrentamientos entre unidades del Ejército y guerrilleros del frente 21 resultaron muertos un soldado y 10 insurgentes; en el 2001, en el mes de febrero, en el corregimiento Altamizar, vereda Las Pavas, del municipio de Prado, se produjo un contacto armado entre unidades del Ejército e integrantes del frente 25, de los cuales tres guerrilleros fueron dados de baja; en agosto, en la inspección La Marina, vereda Los Santos, del municipio de Chaparral, unidades del Ejército se enfrentaron con el frente 21 de las Farc, dando de baja a 4 de sus integrantes; también en agosto, en la vereda La Aurora, jurisdicción de Líbano, unidades del Ejército en enfrentamiento con guerrilleros del frente Tulio Varón de las Farc dieron de baja a 11 de sus integrantes; el día 30 del mismo mes, en área rural de la inspección San Juan de la China, jurisdicción de Ibagué, unidades del Ejército se enfrentaron con integrantes de las Farc, dando de baja a 14 de ellos, mientras que cinco soldados perdieron la vida. (González y Gutiérrez, 2012)

La mayor iniciativa del Estado en el campo de la confrontación con los grupos armados ilegales, no se limitó a las organizaciones alzadas en armas, como se pone de presente al considerar el incremento en el número de capturas y contactos armados que se producían a los grupos de autodefensa. Una de las acciones más relevantes sucedió en la vereda La Profunda, del municipio de Chaparral, unidades del Ejército libraron un combate contra miembros de las autodefensas, que permitió la captura de uno de sus miembros y la incautación de un fusil M-16, munición y 3 equipos de comunicaciones. (González y Gutiérrez, 2012)

3 Principales actos terroristas en contra de la Fuerza Pública en el Tolima

El objetivo de expandir progresivamente el radio territorial donde los insurgentes mantenían el control económico, político y militar fue evidente en la sistematicidad con la que ocurrieron incursiones en otras zonas del territorio nacional. Esto, entre otras razones, explica por qué

algunos municipios se ubicaron en la lista de los más golpeados por las diferentes guerrillas, uno de los más golpeados fue el municipio de Rio Blanco (Tolima), con 11 incursiones.

Es de realzar también la intensidad con la que las FARC realizaron incursiones en este municipio. En total esa organización fue responsable de cinco tomas y cinco ataques, mientras el M-19 realizó apenas una toma. Del total de 11 acciones, seis tuvieron lugar entre 1997 y 2003, cuando se asiste al momento más álgido de confrontación territorial entre guerrilleros y paramilitares por el control de varias zonas del país. En Rioblanco, los guerrilleros propendieron hacia la expulsión de los paramilitares que estaban haciendo presencia en el lugar, lo que les daba, entre otras ventajas estratégicas, la posibilidad de mantener el corredor que del pacífico caucano comunica con los Llanos Orientales “CNMH, relato suministrado por “Francisco”, 29 de mayo de 2014” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

La mañana del 2 de mayo empezaron las confrontaciones y en medio del fuego cruzado miembros del Frente 58 de las Farc lanzaron pipetas sobre las edificaciones donde presuntamente se escondían los paramilitares. Una de ellas cayó sobre la iglesia municipal. Esta acción convirtió el ataque guerrillero en una de las acciones más repudiadas por el país y la comunidad internacional, pues con la explosión murieron 79 civiles que se encontraban refugiados en la iglesia, entre ellos 49 personas menores de edad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

Por razones similares a las relatadas anteriormente, se llevaron a cabo cuatro incursiones armadas por parte del Frente 21 de las Farc en la Inspección de Policía Departamental de Puerto Saldaña (municipio de Rioblanco, Tolima) entre los años 1997 y 2000. Dos de estas acciones fueron ataques a la inspección de policía y las dos restantes tomas del poblado.

El propósito de los arribos guerrilleros siempre fue destruir la inspección de policía, sacar a un grupo de paramilitares denominado Rojo Atá -porque provenían de la cuenca del río Atá- que estaba haciendo presencia en el lugar y restaurar el dominio de la organización insurgente en el sur del Tolima con miras a mantener el corredor que del

pacífico caucano comunica con los Llanos orientales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Las tomas, planeadas por Alias Alfonso Cano y acontecidas el 1 de abril del año 2000 y el 8 de mayo del mismo año, fueron las acciones más significativas porque en ellas se condensa el momento más álgido de confrontación territorial entre guerrilleros y paramilitares por el control de esta zona del país.

Además del valor estratégico atribuido por las Farc a Puerto Saldaña, también había un antecedente histórico que hacía del control de ese territorio un imperativo para la organización. Desde la década del cincuenta se presentó una fractura entre las guerrillas liberales del municipio de Rioblanco que terminó por dividirlos en dos grupos con intereses irreconciliables, Los Comunes y Los limpios; ambos se batieron en una álgida confrontación armada que tuvo durante varios años el sur del Tolima como escenario.

En varias incursiones, y con mayor habitualidad en los momentos en los que hubo acercamientos de paz con el gobierno, las organizaciones que participaron de estos procesos de negociación de manera individual o asociadas a las coordinadoras guerrilleras llevaron a cabo las denominadas por los guerrilleros “tomas pacíficas”, en las que proclamaban a través de megáfonos que no querían enfrentarse a la policía y que su único interés era congregarse a los civiles en la plaza pública para compartirles sus motivos de lucha (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

4 La Fuerza Pública como blanco principal de las FARC

El blanco principal de las incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados fue siempre estaciones de policías y unidades militares, con un registro total de 1.237 veces en que fue atacada directamente a la Policía Nacional. La embestida a la Fuerza Pública era una estrategia de guerra que representaba una afrenta directa para la institucionalidad estatal, esto buscaba disputarle el establecimiento del monopolio en el ejercicio de la violencia y, en general, el control terri-

torial de una zona determinada. Dentro de los objetivos de la acción se encontraban: doblegar a los militares o policías, expropiarlos de sus armas, obligar al gobierno a retirar la Fuerza Pública de los cascos municipales y dar golpes mediáticos para visibilizar la presencia de los grupos insurgentes en las regiones.

Con el paso de los años los guerrilleros fueron incorporando nuevas modalidades para atacar las instalaciones de la Fuerza Pública, cada vez más impactantes en términos de los daños materiales y de los efectos provocados sobre la vida e integridad física de los miembros de la Fuerza Pública.

Con el fortalecimiento de las organizaciones insurgentes durante los años ochenta y noventa, especialmente de las Farc y el ELN, se incrementó la presencia de la Fuerza Pública en los cascos urbanos, aumentando así las confrontaciones entre guerrilleros y miembros de las Fuerzas Militares en el marco de las incursiones. La incorporación de nuevas armas y nuevas formas de ataque a unidades policiales y cuerpos militares provocó una sensible elevación de los daños materiales y de la cantidad de miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos. El trato dado a los militares y policías retenidos por los grupos armados principalmente por las Farc varió entre el llamado a la rendición, los actos de ajusticiamiento y tortura en su contra y la realización de actos de reconocimiento por haber defendido con su vida.

Los guerrilleros al mando de las operaciones le insistían a policías y militares que se entregaran y que abandonaran su institución para sumarse a las filas de la insurgencia sin tener nunca una respuesta positiva por parte de los miembros de la Fuerza Pública.

En varias incursiones, y con mayor recurrencia en los momentos en que hubo acercamientos de paz con el gobierno, las organizaciones que participaron de estos procesos de negociación de manera particular o asociadas a las coordinadoras guerrilleras llevaron a cabo tomas relativamente pacíficas que se caracterizaron por una intención explícita de evitar la muerte de policías y militares, invitándolos a través de altoparlantes a rendirse y a entregar las armas bajo la garantía de respetarles la vida. En varias de estas tomas, los guerrilleros ingresaron a los poblados

gritando que se trataba de una “toma pacífica” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

La mayoría de las incursiones que se le atribuyeron al Frente 6 en todos sus años de operación tuvo lugar en el Tolima en los municipios de Planadas y Rioblanco.

La violencia como recurso estratégico de las FARC

La expansión territorial de los protagonistas del conflicto armado, orientada hacia la conquista de objetivos estratégicos, se expresó en el incremento del recurso al terror que, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, no es una demostración de pérdida de control por parte del actor violento, sino más bien del desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia fines precisos. La violencia que se desencadena en la competencia entre los grupos de autodefensa y la guerrilla resultaba ser la disputa por el control del territorio y los recursos, estos grupos trataban de conseguir el apoyo de la población por medio de la intimidación.

Los grupos armados ilegales imprimieron al conflicto la dinámica local amigo-enemigo, esta era aplicada en las zonas de gran disputa, donde los protagonistas del conflicto actuaban con especial intensidad golpeando civiles indefensos por medio de asesinatos selectivos y matanzas que incrementan los índices de homicidio.

El carácter estratégico de la violencia producida en el conflicto armado ocurrió con intensidad en el departamento del Tolima, a través de la frecuencia de asesinatos y la masacres que tienen por fin afectar las redes de apoyo de los actores armados en enfrentamiento, o el simple hecho de amedrentar a la población y someterla bajo el terror.

En términos del comportamiento de los asesinatos que recaen sobre los civiles en Tolima, este se encuentra bastante integrado a las dos tendencias observadas a nivel nacional entre 1990 y el año 2001. La primera muestra el descenso de los asesinatos hasta 1996, mientras que la segunda tiene que ver con la forma en que las muertes ocasionadas por los actores organizados de violencia se incrementan a partir de 1997. El quiebre de la tendencia descendente de los asesinatos se expresa en

Tolima con un brusco incremento en 1997, momento a partir del cual la violencia no cesaba hasta alcanzar en el 2001 el nivel más elevado (Tamayo, 2012).

Con respecto al perfil de las víctimas, en más de la mitad de los casos se desconoce su actividad, frente al 48% donde se puede relacionar el 21% con campesinos que murieron en masacres y asesinatos selectivos, 3% con comerciantes y ganaderos y 7% con dirigentes políticos y sociales. En cuanto a este último tipo de víctima, 1991 es el año más crítico, debido a la disputa de territorio entre las Farc y las comunidades indígenas del sur del Tolima, que se expresa en el asesinato de varios líderes sociales. Los años siguientes muestran escalas menores en cuanto al asesinato de dirigentes políticos; bajan en 1995 y 1996, para volver a crecer en 1997, año electoral, lo que coincide con la tendencia nacional. Con excepción de 1999, los últimos años muestran una tendencia creciente en dirigentes asesinados (Sepúlveda, 2012).

Los asesinatos que cometieron los actores organizados desde 1990 ocurrieron con la existencia de una elevada concentración geográfica, el 60% de los casos se registró en once de los cuarenta y seis municipios con que cuenta Tolima, siendo Chaparral, San Antonio, Planadas, Ataco, Coyaima y Rioblanco, municipios situados en el sur que registraron mayor cantidad de víctimas (Sepúlveda, 2012).

La dinámica de la violencia desencadenada por los grupos de auto-defensa y las Farc en Tolima, se concentró en cometer asesinatos y masacres para lograr el apoyo forzado de la población y la homogenización del territorio. Las matanzas podían ser indiscriminadas u orientadas a personas específicas, pues más allá del interés de eliminar al apoyo del actor armado, bastaba en demostrar a la población afectada o que ha convivido con uno de ellos, que no la puede defender y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al otro que termina imponiéndose por medio de la violencia.

Las Farc recurría a las masacres, imitando el comportamiento de los grupos de autodefensa. Así, esta guerrilla golpea a la población civil a través de asesinatos colectivos. En el sur del departamento, cabe destacar los hechos protagonizados en el municipio de Chaparral por el frente

21 en enero de 1998, que asesinó a ocho campesinos en las veredas Guadual, Moral y El Bosque. Esta misma estructura armada recurrió en dos oportunidades más a la masacre en la inspección Santiago Pérez, jurisdicción del municipio de Ataco; la primera se registró en enero de 2000 en la vereda El Pole, cuando un grupo de guerrilleros incineraron ocho viviendas y asesinaron a cuatro personas acusadas de colaborar con grupos de autodefensa; la segunda se produjo en el sitio La Dorada, en noviembre de 2000, cuando integrantes de las Farc asesinaron con arma de fuego a otras cuatro personas (Santos, 2014).

Tolima es un departamento con tasas de homicidio considerablemente altas en el ciclo de la violencia, que en la gran escalada nacional desde 1984, observa un comportamiento discreto, aunque en el año 2000 presenta la tasa más alta desde 1993. Al considerar la concentración y la tasa de homicidio a nivel municipal, se advierte que la violencia ha sido especialmente intensa hacia el sur, en San Antonio, Planadas, Rovira, Chaparral y Rioblanco, y hacia el oriente en Icononzo (Rodríguez, 2005).

La convergencia geográfica de estos fenómenos en Tolima, permite insistir en que los altos índices de homicidio en los municipios colombianos tienen una relación muy estrecha con el conflicto armado y la presencia de actores violentos.

Las operaciones de las FF.MM. como respuesta al accionar violento de la guerrilla

El éxito de la estrategia militar desarrollada por las Fuerzas Militares en el departamento del Tolima comenzó a partir de 1999, el porcentaje de acciones de la Fuerza Pública en contra de la insurgencia comenzó a ser superior a las acciones armadas de la guerrilla, comportamiento que se inscribe en la serie de resultados estatales favorables. Dicho escenario motivó la desmovilización individual de varios combatientes ilegales.

Desde el año 2005, las Fuerzas Militares han desarrollado importantes operaciones para recuperar el control perimetral de la cordillera Central,

especialmente del sur del Tolima, a través de la Operación Libertad II, esta hizo parte de las misiones enmarcadas en el Plan Patriota, cuya finalidad primordial era la de desarticular al Comando Conjunto Central de las Farc y dar captura a sus principales cabecillas.

En la actualidad, y de conformidad al Plan Consolidación, el teatro de operaciones comprende el corregimiento de Gaitania en Planadas, hasta el cañón de las Hermosas en Chaparral, pasando por el municipio de Rioblanco, con operaciones militares como Trasimeno. También se desarrollaron algunas de menor envergadura como lo son las operaciones Justiciero y Soberanía para combatir los frentes 21 y 25 de las Farc. El despliegue de pie de fuerza evidenció su impacto positivo en las condiciones de seguridad, como en el caso de las vías de comunicación, donde se presentó un sostensible decrecimiento en el número de retenes ilegales por parte de actores armados irregulares (Santos, 2014).

En el año 2005, el Ejército Nacional inició una ofensiva encaminada a la liberación de zonas de vital importancia para los subversivos y se llevaron a cabo las operaciones Franco, Cárdenas Padilla y Quimbaya, concentradas en la zona del cañón de Las Hermosas, punto clave en el comercio de amapola y de incursión sobre Ibagué, Armenia y el norte del Valle, sitio donde actualmente se está construyendo la hidroeléctrica de Amoyá, que ha sido el teatro de un recrudecimiento de la confrontación armada entre las Fuerzas Militares y las Farc.

En el departamento se ejemplifica cómo las alianzas establecidas con grupos armados ilegales sí buscaban manejar la administración pública para poder así capturar los recursos públicos locales y obtener representación política en los ámbitos local, regional y nacional. Los acuerdos trascendían las penas y llegaban hasta ejercer control territorial, manejar la competencia política, inhibir la actuación de la fuerza pública y regular la vida social y política, entre otros asuntos.

A parte de su relevancia por ser la cuna de las Farc, la ubicación geoestratégica de Tolima ha tenido una especial importancia para los GAML, causando disputas entre los mismos por su condición de corredor estratégico que conecta diferentes zonas del país y presenta un relieve apto para el resguardo y el abastecimiento. La dinámica reciente

del conflicto armado en Tolima se ha concentrado en el sur del departamento, especialmente en el área del cañón de Las Hermosas en la zona Suroccidental, que sería usada desde finales de 2010 como zona de repliegue y refugio para el otrora jefe del Secretariado de las Farc, alias Alfonso Cano, dado de baja en Suárez (Cauca) en noviembre de 2011 por miembros de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima.

En la actualidad, Tolima es una de las diez regiones en donde se está desarrollando el plan de guerra Espada de Honor. Después de la muerte de Alfonso Cano, las FARC, aunque diezgadas, continúan teniendo presencia principalmente en la región Suroccidental a través del Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo, la Alirio Torres y la de Héroes de Marquetalia. En la región Suroriental con el Frente 25 y en la región Centro con el Frente 21, la Columna Móvil Miller Salcedo y la Compañía de Finanzas Manuelita Sáenz. Su presencia se hace evidente por los combates sostenidos con la Fuerza Pública y acciones armadas que requieren bajo esfuerzo militar tales como activación de artefactos explosivos, atentados con francotiradores, hostigamientos y quema de buses.

Asimismo, por las amenazas contra la población civil, desplazamientos forzados de población señalada de colaborar con el bando contrario, la siembra de minas antipersonal y el reclutamiento forzado. Ahora bien, después de la desmovilización de los grupos paramilitares que actuaban en el departamento (Bloque Tolima y ACMM), la presencia de bandas criminales no ha sido muy clara. Posiblemente, la caída en los cultivos de amapola ha desincentivado a las bandas criminales a posicionarse en el departamento, aunque se hace visible un interés de grupos de delincuencia organizada por aprovechar su ubicación central para transportar drogas ilícitas hacia el norte del país y la costa pacífica, y realizar actividades de microtráfico y micro-extorsión.

En 2012 se habló de la presunta presencia de Los Rastrojos y del Comando Niche o Los Niches, en la región Norte. Este último grupo, al parecer, sería responsable de homicidios selectivos con motivos de “limpieza social”. Sobre la situación humanitaria en Tolima merecen atención los siguientes aspectos. Primero, es claro que considerando que la concentración del conflicto armado se da en la parte Suroccidental del

departamento, gran parte de las víctimas del departamento también se concentran en esa zona. En municipios como Ataco, Planadas, Rioblanco y particularmente Chaparral, el accionar armado y de control social de la guerrilla, sumado a los combates entre este grupo guerrillero y la fuerza pública, han generado durante años abandono de la tierra, altas tasas de homicidios, reclutamiento forzado de menores y víctimas por minas, entre otros.